

PRESIDENCIA DEL SEÑOR URIBURU.

53ª Sesión ordinaria del 26 de Setiembre de 1865.

ORDEN DEL DIA.

*Comunicacion de asuntos entrados—Nombramiento del Presidente de la Junta de Administracion del Crédito Público.*

**HH. SS. Senadores.** En Buenos Aires, á los veinte y seis dias del mes de Setiembre de 1865, reunidos en su sala de Sesiones los señores Senadores al márjen inscriptos, se abrió la sesión presidida por el Señor Vice-Presidente Uriburu, con inasistencia del Señor Gomez, con aviso, y ausentes de esta capital con licencia los señores Campo, Rojo (Don Anselmo), Victorica y Madariaga.

ALSINA. Leida y aprobada el acta de la anterior de veinte y cinco del corriente (3ª extraordinaria) se procedió á la lectura de los asuntos entrados en secretaria que lo eran:

BARCO.

BARCENA.

BAZAN.

BORGES.

BUSTAMANTE.

CORREAS.

DARACT.

DÁVILA.

ELIAS.

FERRÉ.

FRIAS (D. F.)

FRIAS (D. U.)

GOMEZ.

GRANEL.

LLERENA.

NAVARRO.

PIÑERO.

ROJO (D. F.)

ROMAN.

1º Un mensaje del Poder Ejecutivo de 25 del corriente, acompañando cuatro expedientes tramitados ante la comision clasificadora en que se cobra el importe de billetes de papel moneda emitidos en la Provincia de Tucuman como recurso de guerra contra Rosas, y espresando que teniendo dudas si dicho crédito procedente de esos billetes está comprendido en la ley de 13 de Noviembre de 1863, habia resuelto someter á la resolucion del Congreso el espresado asunto.

El secretario anunció que el Poder Ejecutivo habia acompañado al espresado mensaje un paquete cerrado y sellado, que decia en su carátula contener los espresados billetes. (Se destinó á dictámen de la Comision de Hacienda.)

2º Otro mensaje de 23 del mismo, acompañando una reclamacion de Don Joaquin Hornos, cobrando perjuicios causados por las fuerzas á las órdenes del General D. José María Paz en la Provincia de Entre Rios, y espresando, que los justificativos de dicho reclamo no son los documentos orijenarios que exige el artículo 2º de la ley antes citada de Noviembre del 63; pero que estaban constituidos por informes posteriores del General del Ejército y subalternos caracterizados, informes que por ser muy anteriores á la ley, se considera que no han podido ser dados para eludir su cumplimiento; pero que el Poder Ejecutivo creia sin embargo que al Congreso correspondia el resolver este punto.

(Pasó á la Comision de Hacienda como el anterior.)

3º Otro mensaje fecha 20 del corriente, acompañando á la resolucion del Congreso una reclamacion de los herederos del súbdito español D. Luis Pondal.

(Pasó á dictámen de la Comision de Negocios constitucionales.)

En seguida se procedió á la eleccion del Senador que de conformidad con la ley de la materia, debe presidir la junta de Administracion del Crédito Público, y habiéndose tomado la votacion nominal, resultó nombrado por unanimidad el Señor Senador por San Juan Don Manuel José Gomez.

Acto continuo el Señor Alsina presentó el siguiente proyecto de decreto:

*El Senado y Cámara de Diputados.*

Art. 1º Se declara ser necesaria la revision y reforma de la Constitucion de la Nacion Argentina.

1º En cuanto al final del inciso 1º de su artículo 6 que establece los derechos de exportacion solamente hasta el año de 1866.

2º Del artículo 88, que responsabilizando á los Ministros por los actos del Presidente de la República, que deben legalizar, los constituye ipso facto, partes esenciales é integrantes del Poder Ejecutivo; ó bien de los artículos 74 y 86, segun los cuales, parece que el Poder Judicial debe ser desempeñado únicamente por el Presidente.

3º De aquella parte del artículo 100 que declara corresponder al Poder Ejecutivo de la Nacion, el conocimiento y decision de las causas que se versan entre vecinos de diferentes provincias.

Art. 2º Comuniquese al Poder Ejecutivo.

*Valentin Alsina.*

Sr. Alsina.—Señor Presidente:—Juzgo de necesidad, al menos de conveniencia bien pronunciada, la reforma de la Constitucion, en los puntos que el proyecto abarca. He limitado solamente á los puntos reformables el proyecto despues de meditar bastantemente sobre el asunto, y sobre lo que puede deducirse del artículo de la Constitucion (creo que es el 30,) que habla de esto, y que pido se lea.

Leyó el Secretario el artículo siguiente:

«Artículo 30.—La Constitucion puede refor-

marse, en el todo ó en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al ménos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convencion convocada al efecto.»

Se vé, pues, que, al parecer, hay dos puntos diferentes sobre que legislar en esta materia: uno, acerca de los puntos que la reforma deba abarcar; y otro, acerca de la Convencion que deba en su caso pronunciarse sobre ella. Yo, pues, he juzgado que el modo mejor de proceder, era designar primeramente los puntos reformables; y á eso provee el proyecto que ha sido leído.

Si este proyecto mereciera la acogida del Congreso, yo inmediatamente presentaré el que concierne á la convocacion de la Convencion, al modo, tiempo, lugar y en fin, á una multitud de puntos, que hay que considerar en la materia. Me ha parecido que no era el proceder mas acertado el presentar un proyecto que abarcase todo, porque se ignora hoy si el Congreso se pronunciará sobre la necesidad de reformas en la Constitucion, y en el caso, no probable, pero si posible, de que se pronunciara en contra, resultaria que habria sido inútil el perder tiempo é invertir trabajo acerca de la organizacion de la Convencion. Por eso advierto que si, por el contrario, el proyecto fuese adoptado, he de presentar inmediatamente el otro concerniente al cuerpo que debe hacer las reformas.

He hecho esta advertencia á fin de que el Senado, como se lo ruego, tenga á bien prestar su aquiescencia á él.

Paso ahora á indicar brevemente los fundamentos que á mi juicio, obran, para demandar la reforma de los artículos á que el proyecto se refiere.

El mas importante de ellos, creo que es el que menos necesita que me estienda á su respecto; porque hay verdades que se entran por los ojos. Tal es la de que, si los derechos de exportacion hubieran de cesar precisamente á fin del año 66, la República es arruinada, ó al menos retrocede en la marcha de progreso que lleva, y que es preciso que nosotros impulsemos.

Los derechos de importacion importan casi una tercera parte de las rentas actuales de la Nacion. ¿En qué tiempo vamos á sustituir

esta tercera parte de la renta con otra? Habrá entónces que dar multitud de leyes, y en verdad, yo ignoro acerca de qué ó cómo se crearán los competentes impuestos ó contribuciones. Habrá que llenar ese déficit, y no veo sobre qué pueda legislar el Congreso pues no existen, diré así, objetos imponibles. El aumento de la contribucion directa, seria un recurso miserable. La venta de tierras públicas, que es otro de los recursos que la Constitucion establece como renta nacional, es claro que no producirá un centavo. ¿Entónces como va á marchar el Gobierno desde 1º de Enero de 1867? Es preciso que desde antes lo digamos; es preciso que el Congreso y el Gobierno á una, se propongan disminuir los gastos en la proporcion de la disminucion que va á sufrir el ingreso; y concibo que esto, ademas de imposible, es nocivo en alto grado. Creo que en el camino que lleva hoy la Nacion, los gastos, léjos de disminuirse en adelante han de aumentarse; porque debemos continuar en el sistema de dar impulso á la industria, al comercio, á todos los ramos, pues así nos lo ordena la Constitucion; y todos sabemos que nada se hace sin dinero. Habrá, pues, que empezar por disminuir notablemente los sueldos todos, y por parar subvenciones y multitud de obras públicas, que ya se han votado, y las que se votarán el año 66. A mi ver, seria un desquicio completo, que, si no importaria la ruina, cuando menos el descrédito de la Nacion.

Así: yo creo que es vital y de primera necesidad que la Nacion se pronuncie prontamente sobre si han de continuar ó nó tales derechos. Poniéndonos como debemos ponernos en todos los casos, debemos preveer aquel en que sea negada la continuacion de esos derechos; porque entonces seria de nuestro deber el arbitrar los medios de llenar el vacío inmenso que esa negacion produciria en las arcas públicas.

Aprovecharé esta ocasion para indicar una cosa, que mucho he deplorado despues.

Yo no tuve parte en la convencion que se estableció en Buenos Aires con el objeto de proponer reformas á la Constitucion de la Confederación. Me asistieron motivos especiales para no hacer parte de ella; y por ello, aunque fui nombrado, renuncié dos veces:

pero despues tuve que aceptar y hacer parte

de la Convencion que se reunió en Santa Fé.

Entonces yo meditaba proponer un artículo que indudablemente hubiera evitado las dificultades en que hoy nos vemos envueltos acerca de los tales derechos de esportacion; pero no hubo tiempo, porque súbitamente la Convencion acordó por aprobadas en globo y sin exámen todas las reformas que proponia Buenos Aires. Esa proposicion fué adoptada por unanimidad; y no me pareció prudente interrumpir ese orden de cosas con una proposicion nueva.

Tambien pensaba proponer reformas acerca de otros puntos, de los cuales uno solo menciono ahora. Pero en fin, está establecido ya otro orden de cosas: esto es, que los derechos de esportacion han de cesar en tal tiempo, no por voto deliberado é ilustrado como debiera ser, de las autoridades constituidas, sino cuando llegue cierto dia, cierto plazo. Pero basta ya por lo que respecta al primer punto.

El segundo es de una importancia relativamente menor; pero es siempre de seria importancia para ir arreglando así ciertas cosas, ciertos puntos, que entre nosotros puede reputarse que están casi al aire apesar de que, contamos con una Constitucion. Tal es, Señor Presidente, el concerniente á la responsabilidad ministerial. No ha muchas sesiones que aquí, en el Senado, se ha tocado con la mano la dificultad que surge de ese punto, por ser él indefinido. Segun la Constitucion, él está obscuramente, ó mas bien, contradictoriamente tratado en ella.

Ella dice, en una parte, que el Poder Ejecutivo reside en el Presidente de la República; y detalla en otra seccion todas las atribuciones del Presidente, no del Gobierno; y despues ordena en otra que los ministros refrendan las disposiciones del Presidente; agregando inmediatamente que son responsables por las resoluciones que han refrendado ó legalizado con sus firmas.

¿Como pueden ser responsables magistrados, diré así, que no son, en lo legal, autores de las ideas ó actos que solo refrendan ó legalizan? Esa es la funcion del Secretario, no la del Ministro, que es cosa muy diferente. Y debo notar que este inconveniente que se toca palmariamente nace, á mi juicio, de que no hubo perfecta consecuencia en los redac-

tores de la Constitución. Ellos propusieron por modelo la de los Estados Unidos, y la copiaron casi testualmente; pero al mismo tiempo introdujeron otras disposiciones, que vinieron a neutralizar en mucha parte los efectos de las que aquella contenía; tal es esta:

En la Constitución de los Estados Unidos no se vé semejante disposición, ni aun la palabra «Ministros» aparece en ella, porque allí esos funcionarios son efectivamente Secretarios, y nada más. Así es que las leyes, los mensajes al Cuerpo Legislativo van firmados únicamente por el Presidente, y los Secretarios no hacen parte ni se presentan al Cuerpo Legislativo a explicar ó sostener las opiniones del Gobierno. Son, en lo legal, Secretarios y nada más, aunque de hecho no es así. Como Secretarios no tienen sino que dar fé de que tal disposición lleva la firma del Presidente, etc. etc. Mas los redactores de nuestra Constitución, urgidos probablemente por la conveniencia de la práctica que existía entre nosotros, vieron la necesidad de que eso no fuera así; y de ahí nació, á mi juicio, la intercalación de ese artículo, que viene á estar en contradicción con los anteriores, relativos al Presidente de la República, único responsable de todos los actos del Poder Ejecutivo. Allí hay perfecta consecuencia en todas las disposiciones. Nosotros hemos faltado á ella, cuando después de copiar la Constitución de Estados Unidos, en cuanto al Presidente, tal como se halla allí, hemos agregado la responsabilidad de los Ministros.

Yo juzgo que este punto necesita un eslabonamiento, que fije las ideas y los principios, y no pudiendo ser esto obra del Congreso, es preciso recurrir á la decisión de una Convención.

El otro punto, Señor, es uno de aquellos que yo me proponía haber designado á la consideración de la Convención de Santa-Fé.

Hay en la sección judicial varias disposiciones con las cuales no estaba yo conforme. Las omito por la brevedad; y me limito, casi como ejemplo, á aquella á que se contrae el proyecto; es decir, está declarado en la Constitución que corresponde á la Corte Suprema de Justicia, al juez de Sección, en fin, á la Justicia Nacional, el conocimiento y de-

que se versan entre individuos residentes en distintas Provincias: disposición que no sólo la creo necesaria y sin objeto, sino además perjudicial y opuesta á nuestros principios. Yo estoy conforme con que se tome de la Constitución de los Estados Unidos, todo aquello que en sí es bueno y aplicable; pero no lo estoy con que haya servilidad en esa copia, de modo que tal cual esté escrita una disposición en la Constitución de Estados Unidos, así la háyamos de trasplantar á la Argentina, pretendiendo que ella venga á rejir entre nosotros, de súbito, cual si las ideas y hábitos estuviesen amoldados á ese orden de cosas.

Según la Constitución, una demanda acerca de un testamento, supongamos, que tenga que entablar un vecino de Salta, respecto de otro que resida en Mendoza, donde obra el expediente de la testamentaria, no puede ser llevada á la justicia de Mendoza; no: es preciso que lo sea á la justicia Nacional. ¿Y esto por qué? Yo creo, Señor, en las pocas ideas que tengo en la materia, que esa disposición tuvo razón de ser en los Estados Unidos, y nació de que cuando concluyó allí la guerra, cuando se trató de dar una ley fundamental á la Nación, estaban vivas, ardientes, las desconfianzas y los odios de Estado á Estado, y se temió que cuando el vecino de un Estado tuviese que demandar al de otro, no encontrase en las autoridades de aquel Estado toda la justicia ó imparcialidad que era de descarse.

Entonces, como garantía y testimonio conciliatorio, se estableció que cuando haya demandas entre vecinos de diferentes Estados no entiendan en ellas las autoridades locales, sino las nacionales. De ahí vino esa disposición. ¿Pero estamos nosotros, Señor Presidente, en iguales circunstancias? Es todo lo contrario; y puedo, con íntima convicción, asegurar que si alguna disposición hay justa y sensata en nuestra legislación, y que sea universal por serlo del sentido común, es la de que quien quiera demandar debe hacerlo en el fuero y ante el Juez de la residencia del demandado. Cuando menos, puedo asegurar que el hecho es que esta ha sido constantemente la práctica en todos los países, al menos en los Latinos. Ya que es de necesidad aplicar la Constitución de otro país al

nuestro, bueno es hacerlo, pero no en aquello que contraría hábitos antiguos; no en aquello que contraría las ideas recibidas; no en aquello que no sea de una evidente utilidad.

Así, á mi ver, nada mas impropio que semejante disposicion, ni mas perjudicial tambien, Señor, cuando se trataba de las reformas de la Constitucion en Santa-Fé; la aspiracion nuestra debió ser obrar en sentido contrario; lejos de que la ley fundamental viniera á establecer y consagrar la existencia de desconfianzas ó recelos mútuos entre las provincias, se debió atender, por el contrario, á infundir en todas las provincias que iban á componer la Nacion, la conciencia, la seguridad de una recta administracion de justicia en todas; de que el hijo de Salta, habia de encontrar en los tribunales locales de San Luis, perfecta imparcialidad; que el de la Rioja creyese que la encontraria en los de Entre-Rios; el de Corrientes, en los Jueces de Buenos Aires, etc.; y cuando ese habia sido el orden de proceder que siempre se habia conocido, y no habia por tanto que contrariar ni forzar hábitos algunos, para continuarlo, no puedo concebir cómo semejante disposicion se dejó subsistente al adoptarse la Constitucion Norte-Americana en la Confederacion. Mas en fin, habiéndolo sido, no hay otro arbitrio que el que una Convencion la reforme; lo cual, supongo, no ofrecerá dificultad.

Debo concluir advirtiendo que muchos son los puntos que habria que tocar, que reformar: pero he creído que en eso debiamos andar con parsimonia: por ello me he limitado solamente á tres; no porque no haya otros mas que necesiten tambien la revision, sino que he consultado la conveniencia de no faltar, en lo posible, al principio que consagra la estabilidad de las leyes fundamentales; estabilidad, por otra parte, que esa misma ley fundamental no ha reputado como estableciendo un orden de cosas fijo é indeclinable: al contrario; pues segun recuerdo, en la Constitucion reformada se decia que ella no podia ser tocada, sino al cabo de diez años, pero andando el tiempo, vinieron los acontecimientos, hubo que echar á un lado semejante disposicion, y tuvieron lugar las reformas del año 60.

Siendo, pues así, yo he juzgado que las reformas deben ser limitadas á muy pocos puntos; y aun diré con franqueza, Señor, si la Comision á que esté asunto pasa, si la Cámara, si el Congreso, creyeren no deber tocar ahora los dos puntos últimos del proyecto, yo no me he de oponer. He juzgado que no parecia propio el poner en movimiento á la Nacion, el convocar una Convencion y hacer los gastos consiguientes, para considerar solamente un punto: por eso he agregado los otros dos y no porque no haya otros en el mismo caso. Sin embargo; si la Comision, si el Senado, si el Congreso, creyesen conveniente, lejos de disminuirlos, aumentarlos, tampoco me he de oponer. Es la espresada consideracion únicamente, lo que me ha hecho ceñirme á los tres puntos que he indicado. Vamos á empezar el primer ensayo de las reformas de la Constitucion. Como he dicho, eso entra en el espíritu de los que la reformaron, de los que abolieron el precepto del antiguo decenio, y establecieron que se podia proponer la reforma cuando se quisiera.

Así es que en el artículo que he hecho leer, no se habla de tiempo, dejando así al criterio y discernimiento del Congreso el juzgar cuando convenga hacerlo.

Estas son, en general, las razones que he tenido para presentar el proyecto y reducirlo á esos términos, separando los dos proyectos que la materia demanda. Vamos á tratar por primera vez de tales reformas, con la mas pura intencion de que ello redunde en bien público, y procediendo de acuerdo con el espíritu que debemos esforzarnos por imprimir en todas nuestras leyes, en toda nuestra marcha: esto es, haciendo que las instituciones de la Nacion caminen siempre, sino de lo bueno á lo perfecto, al menos de lo bueno á lo mejor.

Fué apoyado por un gran número de Señores Senadores.

El Señor Presidente destinó el proyecto á dictámen de la Comision de negocios constitucionales.

*Sr. del Barco.*—En la Sesion de ayer, Señor Presidente, el Señor Senador por Buenos Aires, Señor Frias, pronunció un discurso importantísimo cuyas ideas se han aceptado, respecto

de la muerte del Dr. Viola, y como por una distraccion quizá no manifesté mi conformidad á ellas, creo que el único modo de hacerlo es pedir que ese discurso sea publicado al mismo tiempo que se consigna en el acta, integro tal cual ha sido pronunciado.

Creo que si el Senado acepta esta indicacion, habrá manifestado con ese hecho, lo mismo que yo, que está conforme con esas ideas vertidas y que nos mostramos celosos por los derechos de un ciudadano argentino, segun lo consideramos hasta hoy.

Habiendo sido suficientemente apoyada la indicacion, así quedó resuelto. levantándose en seguida la sesion á la una y media de la tarde.